

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022)
-Discutida y aprobada en sesión virtual de la fecha-

PROCESO	VERBAL RCC
DEMANDANTE	JORGE URIEL ESCOBAR HERRERA
DEMANDADO	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. - GECOLSA-
RADICADO	050266 31 03 001 2020 00188 01 INTERNO: 2021-184
PROCEDENCIA	JUZGADO PRIMERO CIVIL CIRCUITO DE ENVIGADO -ANT.
PROVIDENCIA	SENTENCIA N° 018
TEMAS	Y RESOLUCIÓN CONTRATO- GARANTÍA DE BUEN
SUBTEMAS	FUNCIONAMIENTO
DECISIÓN	REVOCA-NIEGA PRETENSIONES SUBSIDIARIAS SEGUNDO GRUPO
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

En cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en sentencia de tutela STC075-2022 del 19 de enero de 2022, Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-04648-00, donde dispuso la Corte: *“PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto los numeral 2º y 3º (sic) de la sentencia proferida el pasado 24 de noviembre por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, en el marco del proceso verbal que Jorge Uriel Escobar Herrera interpuso en contra de la aquí interesada con radicado No. 2020-00188, únicamente en lo relacionado con el reconocimiento de los perjuicios reclamados por el demandado y la tasación el lucro cesante. SEGUNDO: ORDENAR a la aludida Corporación, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, proceda nuevamente a pronunciarse solamente respecto de la puntual temática, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el presente fallo.”*, se procede, dentro del término concedido, a decidir sobre el presente asunto.

Se advierte que, para mantener el orden de la actuación, se conservará la estructura de la sentencia que la Corte dejó sin valor parcialmente, esto, en cuanto a la reseña de antecedentes y consideraciones generales, realizándose las adecuaciones que correspondan en el caso concreto, de cara a la orden dictada en la sentencia de tutela que está siendo cumplida y a las consideraciones que en dicha providencia expuso la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.

Previo a abordar el estudio del asunto, es pertinente poner de presente que, aunque el Código General del Proceso establece la oralidad como regla general en el trámite de los procesos civiles, en este caso la etapa de sustentación y de sentencia se realiza de forma escrita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, **agilizar los procesos judiciales** y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el cual entró en vigencia “a partir de su publicación y estará vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición”.*

Norma que es de aplicación inmediata para los procesos en curso y para los que se presenten durante el estado de emergencia, como se desprende de las siguientes consideraciones del mencionado decreto

“Que por lo anterior, es necesario crear un marco normativo que se compadezca con la situación actual que vive el mundo y especialmente Colombia, que perdure durante el estado de emergencia sanitaria, y que establezca un término de transición mientras se logra la completa normalidad y aplicación de las normas ordinarias”

“Que este marco normativo procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto”.

“Que estas medidas, se adoptarán en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición de este decreto”

“Que se regula la segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar, en los casos en que no se decreten pruebas en segunda instancia, sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentación del recurso, y por el contrario la sustentación, su traslado y

sentencia se hará a través de documentos aportados por medios electrónicos”.

Por tanto, atendiendo a la orden de tutela emitida el 19 de enero de 2022, por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en la acción radicado 11001-02-03-000-2021-04648-00, procede el Tribunal, a decidir en lo pertinente, el recurso de apelación interpuesto por los dos extremos de la litis, en contra de la sentencia proferida en audiencia celebrada el 13 de agosto de 2021 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO-ANT. dentro del radicado referido.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

La parte actora pretende que a través del presente proceso se hagan las siguientes declaraciones y condenas, luego de haber sido subsanada conforme ordenó el juzgado (carpeta 01. ExpedienteRecibido/ archivos 1 y 5):

PRINCIPALES. 1. DECLÁRESE el incumplimiento por parte del vendedor de las obligaciones a su cargo en virtud del contrato de compraventa celebrado el 6 de febrero de 2019, de una retroescavadora serie LBF05696 modelo 416F2. 2. DECLÁRESE la resolución del contrato de compraventa celebrado el 6 de febrero de 2019, de una retroescavadora serie LBF05696 modelo 416F2, en atención a las graves fallas que ha presentado la misma. 3. Se ORDENE las restituciones mutuas, que el demandante restituya la máquina y el demandado el valor total pagado por el precio \$338.227.385.00. 4. Que este valor restituido al demandante sea indexada a la fecha de la sentencia. 5. Se CONDENE a la demandada al pago de los perjuicios causados por: lucro cesante \$98'010.000.00. 6. Se CONDENE al pago de intereses sobre esta suma desde su causación, de cada uno de los valores que la componen hasta el pago efectivo. 7. Se CONDENE al pago de costas y agencias en derecho.

SUBSIDIARIAS-PRIMER GRUPO 1. DECLÁRESE el incumplimiento por parte del vendedor de las obligaciones a su cargo en virtud del contrato de compraventa celebrado el 6 de febrero de 2019, de una retroescavadora serie LBF05696 modelo 416F2. 2. ORDÉNESE a la sociedad demandada cambiar la máquina retroescavadora serie LBF05696 modelo 416F2 por otra máquina nueva de idénticas condiciones y con una nueva garantía. 3. Se CONDENE a la demandada al pago de los perjuicios causados por: lucro cesante \$98'010.000.00. 4. Se CONDENE al pago de intereses sobre esta suma desde su causación, de cada uno de los valores

que la componen hasta el pago efectivo. **5.** Se CONDENE al pago de costas y agencias en derecho. **SUBSIDIARIAS -SEGUNDO GRUPO 1.** DECLÁRESE el incumplimiento por parte del vendedor de las obligaciones a su cargo en virtud del contrato de compraventa celebrado el 6 de febrero de 2019, de una retroescavadora serie LBF05696 modelo 416F2. **2.** Se CONDENE a la demandada al pago de los perjuicios causados por: lucro cesante \$98'010.000.00. **3.** Se CONDENE al pago de intereses sobre esta suma desde su causación, de cada uno de los valores que la componen hasta el pago efectivo. **4.** Se CONDENE al pago de costas y agencias en derecho.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Narra la parte actora como hechos relevantes para sustentar las pretensiones: El señor ESCOBAR HERRERA vio oportunidad de trabajo en el movimiento de tierras en Urrao -Ant, visualizada la actividad indagó por las opciones del mercado para adquirir la mejor maquinaria que se ofreciera. Una de las primeras opciones fue la marca CAT, reconocida mundialmente, de buena reputación, calidad e idoneidad y servicio por parte de su distribuidor, en Colombia GECOLSA. Antes de adquirir la máquina acudió a las instalaciones de GECOLSA en Sabaneta-Ant e indagó por la retroescavadora serie LBF05696, habiendo recibido de parte del equipo de ventas de la demandada las referencias necesarias e información relevante que influenciarían su decisión de compra.

Cuenta el actor que en varias oportunidades se reunió con el vendedor ANDRÉS ESTEBAN BUSTAMANTE BETANCUR a quien le informó detalles de necesidades y condiciones de la labor que iba a realizar, y él le dio buenas referencias sobre la máquina, enfatizando sobre la calidad de la máquina retroescavadora serie LBF05696 modelo 416F2, la aptitud para las necesidades del comprador, la resistencia, durabilidad, convirtiéndola en la mejor opción, ya que por sus buenas condiciones no sería necesario trasladarla a Medellín desde Urrao para mantenimientos o reparaciones, ni perdería tiempo con fallas. Así presentada la máquina fue suficiente para definir y concluir la compra.

Para la adquisición de la máquina el demandante obtuvo crédito en el Banco Agrario por el 100% del valor de la retroescavadora, el cual pagaría con la explotación de la misma máquina. La compra se realizó el 6 de febrero de 2019, del equipo nuevo retroescavadora cargadora serie LBF05696 marca

Caterpillar, modelo 2018, modelo 416F2, equipada con motor CAT 3054C Turbo, como se especifica en la factura de venta JE36-209 de esa fecha, por valor de \$338'227.385.00, máquina que fue entregada al comprador el 27 de febrero de 2019 en el municipio de Urrao-Ant.

Afirma el demandante, que conforme la documentación entregada con la factura, la máquina tiene una garantía de doce meses contados a partir de la entrega, es decir a partir del 27 de febrero de 2019. Que durante su uso realizó los mantenimientos conforme las instrucciones del vendedor, no permitió que un tercero la interviniera, siempre fue reparada conforme las instrucciones y los repuestos adquiridos en las instalaciones del vendedor, y en general no llevó alguna conducta que excluyera la máquina de la cobertura de la garantía. Pero, puesta en operación la máquina presentó varias fallas en distintas fechas, así:

*El 11 de marzo de 2019 presentó rotura (sic) de la palanca trasera, estando suspendido el trabajo por 3 días, ***“habiendo sido reparada por el vendedor”***.

*El 27 de marzo de 2019 presentó ruptura de la bomba de transferencia, y permaneció varada por 3 días ***“habiendo sido reparada por el vendedor***, quien reemplazó la pieza dañada.

*El 27 de julio de 2019 presentó falla en el control delantero, permaneciendo varada durante 7 días, ***“habiendo sido reparada por el vendedor”***, quien reemplazó la pieza dañada.

*El 20 de agosto de 2019 presentó falla nuevamente en el control delantero y permaneció varada por 23 días, también fue ***“reparada por el vendedor”***, quien reemplazó la pieza dañada.

*El 9 de diciembre de 2019 presenta fallas en la bomba de inyección y en el turbo, permaneció detenida 21 días y fue ***“reparada por el vendedor”***, quien reemplazó la pieza dañada.

*El 17 de enero de 2020 se reventó el balde del equipo trasero, suspendiendo actividades por 14 días, fue ***“reparada por el vendedor”*** habiendo soldado la pieza dañada.

*El 6 de febrero de 2020 presentó fallas en el gato de arrastre, y se suspendió actividades por 12 días, ***“siendo reparada la pieza dañada por el vendedor”***.

*El 14 de abril de 2020 falló el sistema eléctrico, y estuvo detenida por 14 días, ***“dicho daño fue asumido por el vendedor”***.

*El 30 de mayo de 2020 falló el sensor de la bomba de inyección, duró 15 días detenida, pero no fue asumido por el vendedor porque estaba por fuera de la garantía, solo asumió la mano de obra.

* El 17 de junio de 2020, presenta fuga de aceite en el turbo y en el múltiple de escape, y duró 9 días sin funcionar, esta reparación fue asumida por el comprador.

Por estas fallas la máquina permaneció fuera de funcionamiento 121 días, una tercera parte del tiempo de la garantía, evidenciándose que la máquina no funciona para los fines que fue adquirida. Considera el demandante que estas fallas son excepcionales, solo se han presentado en esa máquina, como se indagó en el mercado y en otras empresas, pues normalmente, las de esta clase son de óptimas condiciones.

Hace referencia al art. 9 de la ley 1480 de 2011, para señalar que los 12 meses de garantía empezaron a correr el 27 de febrero de 2020 (sic), pero esta se suspendió en múltiples oportunidades durante el tiempo que la máquina permaneció varada, tiempo que hasta el vencimiento de la garantía es de 83 días, extendiendo la garantía hasta el **20 de mayo de 2020**, en el tiempo que transcurrió desde el vencimiento de la garantía inicial 27 de febrero de 2020 y el 20 de mayo de 2020 cuando vencería por la suspensión, la máquina estuvo parada 26 días, debiendo suspenderse la garantía por dicho término, extendiéndose hasta el 15 de junio de 2020. Durante este tiempo tuvo falla que duró 15 días sin funcionar, debiendo nuevamente suspender la garantía, extendiéndose hasta el 1 de julio de 2020. Y dentro de esta extensión la máquina duró detenida 9 días, extendiéndose la garantía hasta el 10 de julio de 2020.

Cuenta que por las fallas en la máquina se le ocasionaron perjuicios. Indica que la máquina era alquilada a terceros por horas, práctica usual en esta actividad, el valor de la hora es de \$90.000.00 en el municipio de Urrao, la máquina trabajaba y a la fecha trabaja un promedio de nueve horas por día, con un aproximado de 270 horas mensuales, siempre que no tenga fallas. En vigencia de la garantía estuvo detenida 83 días y durante la extensión de la misma estuvo parada 38 días, para un total de 121 días, para un total en horas de 1.089, dejando de generar \$98'010.000.00, que constituye el lucro cesante. Del crédito obtenido para la compra, por \$350'000.000.00 solo se

han cancelado dos cuotas en su totalidad, una de ellas solo se canceló intereses sin abono a capital por \$25'000.000.00

3. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

Subsanada la demanda, fue admitida con auto de noviembre 10 de 2020 (carpeta 01. ExpedienteRecibido/archivo 6) y en el mismo se concede amparo de pobreza y ordena notificar conforme el Dec. 806 de 2020.

La parte demandada procede a contestar la demanda (carpeta 01. ExpedienteRecibido/archivo 7) advirtiéndole que algunos hechos no le constan, otros son ciertos, algunos lo son en forma parcial y otros no son ciertos.

Explica que lo referente a la oportunidad de negocio y necesidades no le consta, y es del fuero interno del demandante, y cualquier consideración sobre el asunto está excluida dentro del numeral 4 de las condiciones de venta, contenidas en la factura de venta JE36-209. Afirma que como a todos los interesados en los productos que comercializa, se le compartió al comprador información correspondiente a las características técnicas de los mismos, y las conclusiones sobre la mejor opción, también son de su fuero interno y no son parte de la negociación. Cuenta que le consta que el demandante obtuvo crédito con Banco Agrario para la adquisición de uno de sus productos, pero desconoce lo relacionado con la proyección del pago.

Asevera que no se prueba la realización de los mantenimientos a la máquina por parte de la demandada, ni la adquisición de repuestos a la misma, como tampoco que no se hayan generado conductas que generaran la exclusión de la garantía.

Sobre las fallas presentadas por la máquina, dijo que esos hechos son parcialmente ciertos, y explicó:

*La del 11 de marzo de 2019 se reportó el mismo día, fue atendida gratuitamente al día siguiente 12 de marzo, por tratarse de un procedimiento menor y sencillo.

*El 27 de marzo de 2019 se realizó cambio de la bomba de transferencia, en forma gratuita, en un plazo de 3 días. Acta de improviso 1841033. Si bien se tomó 3 días la demandada contaba con 30 días hábiles, art. 8 Dec. 735

de 2013 se reglamenta la efectividad de la garantía prevista en el art. 7 y sigs. de la ley 1480 de 2011.

*La falla del 27 de julio de 2019 en el control delantero, fue reportado el 29 de julio de 2020 y fue atendido el 30 de julio, quedando la máquina en correcta operación. Reporte de improviso 2288683.

*La falla del 20 de agosto de 2019 fue atendida el 26 de agosto, acta de improviso 2396858, dejando constancia de los procedimientos de atención en garantía y la entrega de la máquina en operación y satisfacción del cliente.

*El servicio del 9 de diciembre de 2019 consta en la orden de trabajo 3644664, y se tomó 21 días calendario para al atención completa, y contaba con 30 días hábiles para ello conforme la norma.

*Respecto de la falla del 17 de enero de 2020, el desprendimiento del cucharón fue solucionado con soldadura de la pieza, como consta en el INFORME TÉCNICO/ENTREGA SERVICIOS PROVEEDORES, código G161, donde el proveedor deja constancia del procedimiento y el resultado final. Para ese trabajo se tomó 10 días calendario y conforme la norma tiene 30 días hábiles para prestar la atención.

*Del 6 de febrero de 2020 no se tiene registro de reporte de falla o atención en el gato de arrastre.

*Del 14 de abril de 2020 no se tiene registro de reporte o falla en el sistema eléctrico,

*Para el 30 de mayo de 2020 la máquina no se encontraba dentro de la cobertura de la garantía, por eso no se atendió bajo esta cobertura. La atención consta en documento de nominado intervención en Campo número de inspección 3072439, y a título de cortesía la mano de obra no fue cobrada.

* Para el 17 de junio de 2020, la máquina no estaba bajo garantía. Además, cuando se acudió al servicio se evidenció que no se presentaba ninguna clase de falla relativa a fuga de aceite, como se plasmó en documento intervención de Campo número 4039517.

Afirma que las fallas que presentó la máquina dentro del periodo de garantía no son ajenas a lo que puede ocurrir con la operación de ese tipo de máquinas de trabajo, no son repetitivas y fueron atendidas con diligencia, en tiempo menor al consagrado de 30 días hábiles, desmintiendo que la máquina estuvo fuera de operación por causas atribuidas a la demandada por 121 días. Si las fallas fueran excepcionales como las califica el

demandante, pudiere ser indicios de las reales causas de las mismas, atribuibles posiblemente a la mala operación de la máquina, la no realización de los mantenimientos y/o el uso de los repuestos originales.

Sobre la suspensión del término de garantía contemplado en la ley 1480 de 2011, advierte que en realidad la máquina no operó por la atención en garantía 59 días calendario, extendiéndose hasta el 24 de abril de 2020, y dentro del periodo 27 de febrero a 24 de abril de 2020 no se presentó ninguna intervención, por lo cual no hay lugar a ninguna otra cobertura. Mas allá del 24 de abril de 2020. Afirmando que solo las intervenciones de los hechos 14, 16, 17, 18 corresponden a garantía.

Expone que los documentos anexos por la demandante no hacen referencia a la máquina con serie LBF05696. Que no aporta documento alguno que acredite que la máquina era operada 9 horas al día, 270 al mes, como tampoco indica en que se basa para hacer ese promedio, ni la sustentación para el supuesto lucro cesante, es una simple aseveración.

En defensa de sus intereses se opone a todas las pretensiones y como excepciones de mérito formula: 1. INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA DECLARAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Uno de los presupuesto es el incumplimiento del contrato, y para ese caso hay una omisión en el demandante en señalar cual resulta ser la obligación incumplida por el demandado, y dicho incumplimiento debe ser tal que pueda calificarse como grave, no cualquier incumplimiento, debe tenerse en cuenta el tipo de obligación y si realmente ocasiona lesión grave a los intereses de quien demanda. En este caso la obligación principal, que es la entrega a entera satisfacción se cumplió, y la accesoria que es la garantía de buen funcionamiento se cumplió de acuerdo con los alcances naturales y legales del bien y las soluciones más idóneas. 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMPRAVENTA A CARGO DEL VENDEDOR. Entregar el bien, garantía de buen funcionamiento vigente por un año, y se deduce de la demanda que el derecho que reclama es el de garantía, regulada en la ley 1480 de 2011, dec. 735 de 2013. 3. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, a) por falta de sus elementos, ante la inexistencia de hecho ilícito; inexistencia del daño y perjuicio pues el perjuicio reclamado carece de técnica y sustento, no acredita el valor por hora, y que durante el tiempo en que la máquina estuvo parada se le

imposibilitó prestar servicios ya contratados. b) por acuerdo de ausencia de responsabilidad sobre lo pedido. En el contrato de compraventa de la máquina se encontraba excluida la responsabilidad del vendedor frente al comprador, como se expresa en la factura JE36-209, aportada por el demandante, documento que constituye el instrumento por medio del cual se materializan las condiciones del negocio y es la base para que las partes continúen con el negocio o desistan de él, con la aceptación y pago o rechazo y devolución o reclamación. En la factura también se señalan las condiciones de venta, las cuales, en ejercicio de la voluntad, el comprador acepta y paga. Cita el art. 1616 CC.

4. ACTUACIÓN PROCESAL

Integrada la relación jurídico-procesal, se corre traslado de las excepciones de mérito, con pronunciamiento de la parte actora, se convoca a audiencia inicial (archivo 10) con auto del 29 de abril de 2021, la cual tuvo lugar el 10 de junio de 2021, en esta sesión se agotaron las etapas de conciliación, saneamiento, interrogatorios de parte, fijación del litigio, decreto de pruebas y recepción de testimonios, fijando fecha para su continuación el 16 de julio de 2021 (archivos 12, 13, 14), en esta sesión se continuó con la recepción de las pruebas (archivo 19), y se fija fecha para continuar con alegatos y fallo, siendo reprogramada la fecha para el día 12 de agosto de 2021, sesión en la cual se escucharon alegaciones de conclusión (archivo 23 y 23.1), profiriendo el fallo en sesión del 13 de agosto de 2021 (archivo 25).

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Agotado el trámite del proceso, y para resolver el asunto puesto a consideración de la jurisdicción, en sesión de audiencia del 13 de agosto de 2021 se profirió sentencia (archivo 25).

En dicha sesión el señor Juez, luego de instalar y proceder con la presentación de los apoderados de las partes, señala que se reúnen los presupuestos para proferir el fallo, sin advertir causal de nulidad.

Sobre el caso que nos ocupa, recuerda que la pretensión formulada por el actor es la de RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO y para su prosperidad se deben cumplir los presupuestos señalados en el art. 1546 y 1609 CC, existencia del contrato válido, que la demandada haya incumplido, y que la demandante haya cumplido o se haya allanado a cumplir. Señala que la

parte actora funda su pretensión en el incumplimiento del contrato de compraventa de la máquina retroexcavadora, porque durante el tiempo en que la garantía operaba, presentó fallas, sin poder laborar 121 días, invocando el art. 932 C de Cio que regula la garantía de buen funcionamiento, el 870 ib y 1546 CC, establece que no se reclama la garantía o que no se haya cumplido con ella, sino que se incumplió el contrato.

Sobre el contrato válido, se afirma en la sentencia que está probado con la factura de venta JE36-209 de febrero 6 de 2019, la aceptación expresa de la parte demandada en la contestación, negocio que es de naturaleza comercial, y no es de consumo. Así las cosas, sostiene el juez, que el vendedor debe garantizar una posesión útil de la cosa vendida, un uso que no se vea menguado por vicios ocultos, vicios que hagan impropia la utilización de la cosa.

Sobre el incumplimiento por la parte demandada, el extremo activo dio cuenta de 10 daños, la parte demandada aceptó los narrados en los hechos 23 a 28 (sic), en el proceso se probaron los narrados en los hechos 21 y 22 con la confesión del apoderado judicial al aceptar que los atendió pero que ya estaban por fuera de la cobertura de la garantía, y los del 6 de febrero y 14 de abril de 2020 (h 19 y 20) fueron probados con la constancia de servicio de la reparación del cilindro de arrastre y del sistema eléctrico, esta última con la declaración del operador de la máquina, el señor MODESTO quien afirmó que había cambiado el termostato por que la demandada no quiso atenderlos. Fallas que debe analizarse en conjunto, pues si bien no son reiterativas (es decir la misma falla), si se presentaron a los pocos días de entrega y las demás con intervalos de tiempo muy cortos. Se demuestra entonces, dice el a quo, que la máquina no es apta para las labores para las cuales fue creada, no se ha podido usar en forma plena, se incumple porque no se entrega la cosa garantizando su uso, sin discutir si se cumplió o no con la garantía, la buena o mala fe, y la demandada no alegó que la demandante haya dado mal uso o mal manejo al bien, como tampoco que no se le hayan realizado los mantenimientos en la empresa, sino que los hizo MODESTO, comprando los repuestos y aceites en la sede de la demandada. Advierte que no es de recibo la declaración de ESTEBAN, testigo empleado de la parte demandada, quien al momento de su interrogatorio presentó fotografías con las cuales se dice sobre el mal uso de la máquina, porque la

demandada no dijo nada sobre el mal uso, ni frente a estas pruebas fotográficas, que debió anunciar y pedir como tal, y que deberían estar en poder de la demandada y no de un testigo, pues son parte de la labor de garantía que debe cumplir como vendedora. Además, el testigo no ofrece fundamentos de su dicho, siembre habla de “creemos”, no da certeza de su testimonio.

Acreditado el incumplimiento del contrato, procede la resolución del contrato por incumplimiento, adentrándose el señor juez en el análisis de la procedencia de la condena por indemnización de perjuicios reclamada, recordando que la demanda se basó en los vicios de la cosa, a la luz del art. 934 C de Cio. Hace un análisis de las acciones que se pueden originar en los vicios de la cosa, pero indica que el hecho que se pueda incoar la acción resolutoria por vicios redhibitorios, ello no implica que se acredite que el vendedor debía conocer el vicio para reconocer perjuicios, arts. 1918 CC y 934 C de Cio entonces para el caso, la demandada no conocía los vicios por tanto no hay lugar a condena en costas.

Luego de este análisis, falla que las excepciones son imprósperas; declara resuelto el contrato de compraventa de la retroescavadora; ordena restituciones mutuas, a la demandada devolver el precio pagado el 6 de febrero de 2019 indexado con el IPC hasta la fecha de pago; al demandante restituya la máquina objeto de compra, y adiciona, previo pago de la devolución del precio indexado, 10 días luego del pago; condena en costas a la demandada reducidas en un 20% ante la prosperidad parcial de la pretensión, y fija agencias en derecho. Negando las demás pretensiones.

6. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

En contra de la decisión interpusieron recurso de apelación las dos partes así:

La **parte actora** formula como reparos concretos en escrito presentado dentro de los tres días siguientes al proferimiento del fallo (archivo 27.1, que está mal marcado) y que fueron sustentados en esta instancia (carpeta TrámiteSegundaInstancia/archivo 08):

1. Reclama por no haberse accedido a la condena al pago de perjuicios por lucro cesante. El despacho estimó que a la luz de los arts. 934 C de

Cio y 1918 CC no se acreditó que la demandada conociera los vicios ocultos de la máquina, pero dicha exigencia no procede, pues las pretensiones se estructuraron sobre el incumplimiento contractual (art. 1546 CC) de garantizar el buen funcionamiento de la máquina, consagrada en el art. 932 C de Cio, acreditando dentro del proceso los elementos de la responsabilidad. Lo sustenta en que se probó que durante los días que la máquina estuvo detenida se encontraba ejecutando trabajos que tuvieron que ser atendidos con otras máquinas, o que no pudo cumplir a pesar de estar contratado, ello con los testimonios de las personas que dieron fé de las fallas de la máquina, de los contratos celebrados, y la imposibilidad de cumplir con ellos. Además del juramento estimatorio que es prueba del perjuicio causado. Al no estructurarse la demanda con base en el art. 934 C de Cio, no se debía acreditar que la demandada conocía los vicios ocultos, pues lo que se pidió y acreditó es el incumplimiento de la obligación consagrada en el art. 932 C de Cio, garantía de buen funcionamiento, que fue aceptada por la demandada. El remedio contractual elegido es el fijado en el art. 1546 CC que consagra la condición resolutoria tácita con indemnización de perjuicios. Advierte que, en gracia de discusión, en caso de requerirse el dolo o culpa para responder por la obligación indemnizatoria, acude al art. 1616 CC que regula la obligación indemnizatoria por los perjuicios predecibles.

2. Por que indexó el valor cancelado por el demandante desde el 6 de febrero de 2019 hasta la fecha de la sentencia 13 de agosto de 2021, por una suma de \$364'836.071.00, pero no tuvo en cuenta los intereses correspondientes en aplicación de la fórmula $Ra(1+i)^n$ a la n, arrojando un total de \$422'574.663.5.

La **parte demandada** presenta inconformidad con la decisión y formula como reparos en el mismo acto de audiencia, los cuales fueron sustentados en tiempo en esta instancia (carpeta TrámiteSegundaInstancia/archivo 06):

1. Ataca los cuatro primeros numerales de la decisión. No comparte que el juzgado encamine la acción, ya que el demandante no determinó la acción de cara a los efectos como la caducidad de la acción, la prescripción del derecho y el derecho de defensa. El juez trasladó al demandado la carga de defenderse de cualquier acción que surgiera de los hechos y fundamentos de derecho.

Al sustentar este reparo, indica que el juez partió de interpretar, según hechos y pretensiones, que estamos frente a una resolución de contrato por incumplimiento, pero según los lineamientos jurisprudenciales sobre la interpretación de la demanda (STC6507-2017), el juez parte de que el conflicto consiste en determinar si el demandado cumplió o no con los deberes establecidos en los art. 934 C de Cio y 1915 CC, que se encargan de regular los relacionado con los vicios redhibitorios en la cosa vendida que la haga impropia para su natural destinación o fin previsto en el contrato. Es así como el juez yerra en su interpretación y va mas allá de donde el derecho se lo permite, como se señala en la misma sentencia STC. Dice el recurrente que esto es importante, porque de los hechos expuestos en la demanda se desprende que la intención del demandante no era establecer incumplimiento por vicios redhibitorios, sino establecer responsabilidad por el supuesto incumplimiento de la garantía de buen funcionamiento, tanto es así, que el mismo demandante ha formulado reparo por no reconocerse perjuicio, por cuanto sus pretensiones se fundan en este incumplimiento regulado en el art. 932 C de Cio. Con esta claridad el juez debió limitarse a examinar si dicha obligación de garantía de buen funcionamiento se había o no cumplido, en que grado, las consecuencias en cada caso y si operaba algún fenómeno de caducidad y/o prescripción, en concordancia con las pretensiones.

2. La base para declarar la resolución es que la máquina no cumplió los fines para los cuales fue adquirida, al tenor del art. 934 C de Cio, pero hay ausencia de consideraciones sobre cuando debe entenderse que la cosa si cumple o no con lo esperado, cuantas garantías son válidas, cuantos días para atender la garantía, difiere de la calificación de útil e idóneo del juzgado. En el proceso se probó que con la garantía se permitió que la máquina fuera usada, el caso se atendió, al punto que para la fecha del interrogatorio la máquina tenía más de 4.864 horas de uso, entonces sí prestó el uso y se atendió la garantía de buen funcionamiento.

Sustenta este reparo que se relaciona con el CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO. Base de la demanda. Diciendo que según jurisprudencia, para la responsabilidad civil contractual se debe acreditar el contrato, incumplimiento del deudor por dolo o culpa, daño o perjuicio, causalidad. Afirma que el hecho de que existan fallas no implica incumplimiento de la obligación de garantía, la falla es el origen de la

obligación de garantía de buen funcionamiento, para ello debe estar probado que no se efectuaron las reparaciones necesarias y que tal incumplimiento estuviera acompañado de culpa o dolo a efectos de la indemnización. En el caso GECOLSA atendió todas las solicitudes de garantía como lo afirmó el demandante en su interrogatorio, dentro de los tiempos estipulados, acotando que las fallas presentadas no fueron repetitivas.

3. Como tercer reparo agrega que los vicios redhibitorios son previos al negocio, graves que inutilicen la cosa y no conocidos, presupuestos que no se cumplen.

Al momento de sustentar este reparo, advierte que con la claridad que la interpretación que hizo el juez es equivocada, como se dejó dicho en el anterior reparo, y en el evento que no se acoja lo planteado, se señala que tampoco hay vicios redhibitorios en este caso, a la luz del art. 934 c de Cio, pues no se reúnen los presupuestos para ello, que sea anterior al contrato o entrega, que sea oculto y que sea de tal gravedad que haga la cosa impropia para su destino, ninguno de estos fue alegado en la demanda, tal como lo alega la demandante las fallas fueron posteriores a la entrega y fueron atendidas en virtud de la garantía. Nótese que la jurisprudencia (cita SC4454 de 2020) exige que quien alegue el vicio debe probar que era anterior a la entrega. Sobre la gravedad del daño que haga impropia la cosa, que dio por probado el juez, debe decirse que hay notoria ausencia de examen de cuál era la natural destinación de la máquina y que clase de vicio la haría impropia. Por el contrario, lo probado es que la máquina ha cumplido con notoria propiedad los fines para los cuales fue adquirida, como lo confirma el demandante en su interrogatorio al decir que la máquina lleva registradas 4.864 horas de operación, las cuales a \$90.000 hora como se afirma en la demanda, arroja un total de \$437'760.000, valor muy superior al de compra, y al tratarse de una acción por vicios redhibitorios, debió probarse la gravedad del defecto y que la cosa resultaba impropia para su natural destinación.

Reclama por la valoración del testimonio de MODESTO para llegar al convencimiento de la inutilidad de la máquina, al considerar que es un operador experto por los supuestos años de experiencia, sin que acreditara estudio técnico, académico o acreditación, desestimando al mismo tiempo el testimonio de ANDRÉS VELASQUEZ ingeniero mecánico experto en este tipo

de maquinaria quien señaló las consecuencia de la inadecuada operación y su falta de mantenimiento completos, consideró el juez que el operador estaba capacitado para realizar un cambio de aceite y filtro desconociendo que los mantenimientos no se limitan a eso, pues las operaciones requeridas son muchas mas, que necesitan de conocimientos avanzados.

Continúa su sustentación, diciendo que la reparabilidad o no del defecto tiene incidencia reconocida por la jurisprudencia para calificar o no al vicio como redhibitorio para determinar si procede la redhibición o la rebaja, y si el vicio es reparable debe optarse por mantener el negocio, principio de conservación.

4. En la sustentación plantea como reparo PRESCRIPCIÓN, al considerar que, pese a que la parte actora no escogió esta institución para su pretensión, fue la abordada por el juzgado al interpretar la demanda, correspondiendo entonces verificar si opera la caducidad o la prescripción, a la luz del art. 938 C de Cio que señala que para las acciones previstas en los art. 934 y 937 la acción prescribe a los seis meses a partir de la entrega.

II. CONSIDERACIONES

1. PRESUPUESTOS PROCESALES

Conforme la ley procedimental, el trámite de proceso se adelantó con el cumplimiento de los presupuestos necesarios que permiten dar validez a lo actuado, y es este Tribunal Superior a través de la Sala Tercera de Decisión Civil, competente para desatar el recurso de alzada interpuesto por ambas partes, en contra del fallo emitido por el iudex a quo dentro del proceso de la referencia.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Debe la Sala dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en sentencia de tutela STC075-2022 del 19 de enero de 2022, Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-04648-00, donde dispuso la Corte: DEJAR sin valor ni efecto los numerales 2º y 3º de la sentencia proferida el pasado 24 de noviembre, únicamente en lo relacionado con el reconocimiento de los perjuicios reclamados por el demandado y la tasación el lucro cesante y ORDENAR que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, proceda nuevamente a

pronunciarse este Tribunal, sobre dichos tópicos teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el citado fallo, que en esencia se concretaron en los siguientes párrafos:

“Así las cosas, adviértase que en la sentencia de primer grado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado declaró resuelto el contrato de compraventa de la máquina retroexcavadora, como consecuencia de los vicios redhibitorios que afectaban a ésta, ordenando las respectivas restituciones mutuas con indexación del precio a devolver, desestimando las pretensiones indemnizatorias por considerarlas de tajo improcedentes, motivo por el cual descendió al análisis de cada uno de los puntos expuestos por la parte demandada frente a ese tópico, extremo a quien, en últimas, favoreció esa decisión; empero, ya en segundo grado, si bien fue revocado el fallo en lo atiente a la resolución del contrato y las consecuentes restituciones (pretensiones principales y subsidiarias -primer grupo), se accedió al segundo grupo del petitum subsidiario, declarándose que la demandada incumplió el contrato plurimencionado, debido a las múltiples fallas presentadas por la maquina durante el tiempo de la garantía de buen funcionamiento y condenándosele a pagar al demandante, la suma de \$46'728.000 por concepto de lucro cesante, más intereses a la tasa del 0.5% mensual desde la fecha de proposición de la demanda y hasta la fecha de pago efectivo, circunstancia que obligaba al ad quem a estudiar y resolver cada uno de los alegatos que en tal sentido enfiló aquélla al momento de contestar la demanda, así como al descorrer el traslado del recurso de alzada promovido por la parte demandante, sin que a ello hubiere procedido, materializándose, de ese modo, el primero de los defectos enrostrados por la tutelante (procedimental).

2.2. De otro lado, no escapa a la atención de la Sala, que los medios de convicción tenidos en cuenta por la Colegiatura criticada para la tasación de los perjuicios solicitados en la modalidad de lucro cesante (prueba testimonial), no se estiman suficientes ni idóneos para tal fin, pues no son expresos ni exactos en el señalamiento de las pérdidas económicas que supuestamente sufrió la parte demandante con ocasión de la avería de la máquina retroexcavadora y el tiempo que por ello permaneció inactiva, ni tampoco de los trabajos que a ciencia cierta dejó de desarrollar durante tal lapso (...)

(...)Por tal motivo, si aun estudiados los alegatos de la parte demandada acerca de la improcedencia de los perjuicios reclamados, llegare a considerar el juez de segundo grado que los mismos sí se produjeron, deberá analizar concienzudamente, a efectos de su tasación, si los mismos se hallan plenamente demostrados, no con base en suposiciones o planteamientos hipotéticos generados a partir de las distintas manifestaciones de las partes y los testigos sobre esa especial temática, sino con base en las pruebas legalmente recaudadas, con fundamento en lo dispuesto en los cánones 176 del Código General del Proceso, que a la letra reza: «[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba», y 206 ejusdem”

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

3.1. CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL

El Código de Comercio en su artículo 905 define este contrato diciendo “*La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario. Para los efectos de este artículo se equiparán a dinero los títulos valores de contenido crediticio y los créditos comunes representativos de dinero.*”

3.2. GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

En el ámbito comercial, la venta suele estar acompañada de garantías, entre ellas, la de buen funcionamiento, que la misma normativa comercial en su art. 932 regula en los siguientes términos, señalando que se presume en el art. 933 ib.

“Si el vendedor garantiza por tiempo determinado el buen funcionamiento de la cosa vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento que se presente durante el término de la garantía, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, so pena de caducidad.

El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de funcionamiento que sea reclamado oportunamente por el comprador.

La garantía sin determinación de plazo expirará al término de dos años, contados a partir de la fecha del contrato”.

Sobre esta garantía de buen funcionamiento, la CSJ en sentencia 2142 de 2019 se pronunció, así:

“3.1. Acerca de la «garantía de buen funcionamiento», el artículo 932 del Estatuto Mercantil, prescribe:

«Si el vendedor garantiza por tiempo determinado el buen funcionamiento de la cosa vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento que se presente durante el término de la garantía, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, so pena de caducidad.

El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de funcionamiento que sea reclamado oportunamente por el comprador.

La garantía sin determinación de plazo expirará al término de dos años, contados a partir de la fecha del contrato».

Como puede observarse, el citado precepto adopta una perspectiva funcional en la consagración de la mencionada garantía y acorde con ese criterio, para que la misma opere, sólo se exige la configuración de un problema en el funcionamiento de la cosa, sin entrar a calificar su gravedad o los desperfectos estructurales de donde aquel deriva; de tal manera que para su exigibilidad, en principio basta acreditar que la cosa presentó fallas al utilizarla en la actividad para la cual fue fabricada y adquirida.

Cabe señalar que el Estatuto Mercantil no define el concepto de garantía; no obstante siguiendo los lineamientos del Estatuto del Consumidor¹, con fines exclusivos de ilustración sobre el tema, puede entenderse por aquella la obligación temporal del vendedor de responder al comprador por calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de la cosa vendida, de acuerdo con las condiciones ofrecidas en el marco del respectivo convenio o las legalmente exigibles.

En consecuencia, en el ámbito de su operatividad, la «obligación de garantía de buen funcionamiento», podría comprender la instalación del producto cuando así sea acordado o las condiciones técnicas lo exijan; el suministro de información o instrucciones al adquirente en cuanto al uso de la cosa o su mantenimiento; la realización periódica de éste o sus reparaciones; la provisión oportuna de repuestos; y en general, la ejecución de todas aquellas actividades que por disposición legal o convencional resultaren necesarias para asegurar la conservación y el buen funcionamiento de la cosa».

3.3. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

En la misma sentencia en cita, la CSJ advierte sobre la responsabilidad por el incumplimiento de la garantía de buen funcionamiento, y sobre este tema expone:

“3.2. En cuanto a la responsabilidad civil por incumplimiento del vendedor respecto de la obligación de «garantía de buen funcionamiento» originada en un contrato de compraventa mercantil, y en particular, en torno al daño causado o derivado de «cualquier defecto de funcionamiento», de conformidad con aquellas pautas jurisprudenciales y lo previsto en el artículo 932 del Código de Comercio, cabe precisar, de un lado, que el comprador puede demandar la indemnización de perjuicios, siempre y cuando la señalada garantía la haya reclamado en la oportunidad legalmente establecida y durante la vigencia de la misma.

De otro lado, la prerrogativa conferida al comprador para reclamar la indemnización de perjuicios al vendedor por «cualquier defecto de funcionamiento», prevista en el inciso 2º artículo 932 del Código de Comercio, no está limitada. Por tanto, con apoyo en las pautas jurisprudenciales y doctrinarias a que anteriormente se hizo alusión, cabría señalar que, en principio, el perjuicio abarcaría el daño producido a la propia cosa y el generado a la actividad a la cual se encontraba destinada la misma, toda vez que la característica de «perjuicio directo», impone la exigencia de una relación causa-efecto entre el hecho perjudicial y el detrimento patrimonial, sin menoscabo de las estipulaciones contractuales sobre esa materia.”

¹ Ley 1480 de 2011, artículo 5º, ordinal 5º: «Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto»

3.4. DE LOS VICIOS OCULTOS

Entre tanto, en el art. 934 ib se regula lo relacionado con los vicios ocultos en la cosa vendida, al decir *“Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor.-.-En uno u otro caso habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor, si éste conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio o el defecto de la cosa vendida”*

3.5. DEL DAÑO

Recordemos que la jurisprudencia y la doctrina han reiterado que el daño susceptible de reparación ha de ser cierto, directo, actual y afectar un interés reconocido o guarnecido jurídicamente. Y en relación con el daño ocasionado con el incumplimiento de un contrato ha dicho la Corte en sentencia 2142 de 2019, MP Luis Alonso Rico Puerta:

“El daño contractual, al igual que cualquier otro, debe exhibir como notas características para que habilite la pretensión indemnizatoria, las de ser cierto, subsistente, personal y afectar un interés lícito.

Es cierto el que efectivamente se produjo, y no hay duda alguna en cuanto a su generación, esto es, que sus secuelas se puedan percibir, pues de alguna manera se exteriorizan.

A su vez, es subsistente el que no ha sido remediado, compensado o indemnizado, y es personal porque sólo la víctima, en este caso, el contratante cumplido tiene derecho a demandar el detrimento padecido.

De otro lado, el perjuicio es indemnizable por haber afectado un interés lícito, es decir, el causante del daño no estaba legitimado para producirlo, incumpliendo las prestaciones a su cargo, al tiempo que el perjudicado tenía derecho a exigir que la convención fuera satisfecha.

Además, en el ámbito contractual, el perjuicio pasible de ser indemnizado es el caracterizado por ser «directo», es decir, aquel estructurado, por virtud del vínculo de causalidad, en el sentido de establecer que proviene de la infracción contractual.”

III. CASO CONCRETO

Conforme lo estipulado en el art. 320 y 328 del C.G.P. el Tribunal se limitará a estudiar los puntos que han sido planteados como inconformidad en contra de la sentencia que es objeto de recurso, y específicamente, de cara al cumplimiento de la orden tutelar, aquellos que refieren a las pretensiones

subsidiarias segundo grupo, relativas al reconocimiento de la indemnización por la garantía de buen funcionamiento ante las fallas presentadas por la máquina durante el tiempo en que operó la garantía.

Como se explicó en la sentencia parcialmente anulada, al abordar el tópico de la interpretación de la demanda, el cual no fue afectado por la orden tutelar, el libelo genitor en este asunto no tiene la claridad deseada, habiéndose concluido allí que, por un lado, las pretensiones principales y subsidiarias primer grupo estaban encaminadas a la declaratoria de incumplimiento y resolución del contrato y, por otro lado, las pretensiones subsidiarias segundo grupo, refieren al reconocimiento de la indemnización derivada de la garantía de buen funcionamiento ante las fallas presentadas por la máquina durante el tiempo en que operó la garantía.

Superada, y no habiendo sido afectada por la orden tutelar, la discusión y decisión sobre el incumplimiento del contrato que llevó a que se denegaran en esta instancia las pretensiones principal y subsidiarias-primer grupo, debe ocuparse la Sala de estudiar las pretensiones subsidiarias segundo grupo, en tanto lo decidido sobre ello dio lugar a la orden tutelar cuyo cumplimiento nos corresponde.

La parte demandante pretende con ese grupo de pretensiones, se declare *“el incumplimiento por parte de EL VENDEDOR -hoy demandado-, de las obligaciones a su cargo en virtud del contrato de compraventa celebrado el día 6 de febrero de 2019, por medio del cual el señor JORGE URIEL ESCOBAR HERRERA -hoy demandante- adquirió la máquina Retroexcavadora Serie LBF05696 modelo 416F2. SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración primera de este capítulo, se condene a la parte demandada, al pago de los perjuicios causados en su categoría de lucro cesante conforme los hechos de la demanda, por valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS (\$98.010.000). TERCERA. Que se condene al pago de los intereses causados sobre la anterior suma de dinero desde la fecha de causación de cada uno de los valores que la componen hasta la fecha efectiva del pago. CUARTA. Que se condene a la sociedad demandada al pago de las costas y agencias en derecho”*.

Y de forma insistente alega que la demandada incumplió la obligación consagrada en el artículo 932 del Código de Comercio, por no garantizar el buen funcionamiento de la máquina vendida, lo que además le causó perjuicios en la modalidad de lucro cesante.

Por su parte, la demandada en su defensa adujo al contestar la demanda, que reconoció el otorgamiento de la garantía de buen funcionamiento, vigente durante un año, pero que el reconocimiento de la misma no implica la ausencia total de eventualidades relacionadas con la calidad y/o funcionamiento del bien; que actuó con diligencia frente a los requerimientos de calidad y reparación solicitados por el demandante, respetando los plazos establecidos para la realización de las reparaciones derivadas de la garantía, las piezas requeridas fueron reemplazadas o atendidas gratuitamente y no se presentaron fallas repetitivas en la máquina; que en este caso no existe una relación de consumo y por ello no es aplicable la Ley 1480 de 2011 y, que las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato de compraventa se han cumplido y no hay incumplimiento contractual.

Y en sus reparos frente a la sentencia y pronunciamiento sobre la apelación de la parte demandante expuso que la demandante reconoció que Gecolsa atendió todas las solicitudes de garantía; que es necesario establecer si efectivamente la sociedad demandada incumplió la obligación de la garantía de buen funcionamiento y que el incumplimiento sea imputable por dolo o culpa; que la existencia de una falla no implica el incumplimiento de la obligación de garantía de buen funcionamiento, sino que, la falla es el origen de la obligación de garantía de buen funcionamiento; que para determinar entonces un incumplimiento de la garantía de buen funcionamiento, sería necesario que apareciera probado que el Demandado no dio cumplimiento a la instalación del bien, no entregó la información de operación o no efectuó las reparaciones que fueran necesarias y, además, para efectos de responsabilidad indemnizatoria, que tal incumplimiento estuviera acompañado de culpa o dolo.

Es claro en el caso bajo examen que la parte demandante ampara su pretensión en el artículo 932 del Código de Comercio, de modo que el análisis de dicha norma será el determinante para decidir sobre la misma.

Así entonces, la pluricitada norma que regula la garantía de buen funcionamiento establece:

«Si el vendedor garantiza por tiempo determinado el buen funcionamiento de la cosa vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento que se presente

durante el término de la garantía, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, so pena de caducidad.

El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de funcionamiento que sea reclamado oportunamente por el comprador.

La garantía sin determinación de plazo expirará al término de dos años, contados a partir de la fecha del contrato».

Como se reseñó en las consideraciones generales de esta providencia, nuestro máximo órgano de decisión civil al pronunciarse sobre el alcance de esta norma indicó que, para que la garantía opere solo se exige la configuración de un problema de funcionamiento de la cosa y que la misma comprende, en general, la ejecución de todas las actividades que por disposición legal o convencional resulten necesarias para asegurar la conservación y el buen funcionamiento de la cosa. Pero además, sobre la posibilidad de reclamar indemnización de perjuicios al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento, ha indicado la mentada Corporación que el perjuicio abarca el daño producido a la propia cosa y el generado a la actividad a la cual se encontraba destinada la misma.

La parte demandante pretende la indemnización de perjuicios derivada de defectos de funcionamiento, específicamente un perjuicio relativo a lo producido por la actividad a la cual está destinada la máquina retroexcavadora objeto de compraventa y alega que el hecho de que la máquina comprada hubiese presentado fallas es suficiente para entender incumplido el contrato y acceder a la pretensión indemnizatoria, mientras que la parte demandada aduce que la simple presencia de fallas no implica el incumplimiento de la garantía, ni del contrato y que es necesario el incumplimiento en las reparaciones, el que no acaeció.

Esa diferencia en la interpretación de la norma base de la pretensión indemnizatoria que aquí nos suscita, es precisamente el punto álgido en este asunto, pues si bien, una lectura descontextualizada de la norma puede llevar a entender que para que opere la indemnización de perjuicios por defectos de funcionamiento el único requisito es que el defecto exista y que el comprador hubiese reclamado oportunamente por dicho defecto, lo cierto es que ese entendimiento resulta alejado del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que ha desarrollado el tópico de la responsabilidad civil contractual. Debe tenerse en cuenta en este punto que no nos encontramos en una relación contractual donde se esté aplicando el estatuto del

consumidor, normativa que contiene ciertos favorecimientos al comprador-consumidor como parte “débil” en la relación de consumo, sino que estamos en una relación netamente comercial.

Lo anterior resulta importante, en tanto en asuntos como el presente, el reconocimiento de perjuicios implica necesariamente el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la prosperidad de pretensiones indemnizatorias en temas contractuales, esto se traduce en la necesidad de que el demandante demuestre: **(i)** la existencia de un contrato válidamente celebrado; **(ii)** el incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputable al deudor por dolo o culpa; **(iii)** un daño o perjuicio; y **(iv)** el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño.

Y es que ese entendimiento es precisamente el que se desprende también de lo expuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SC2142 de 2019, donde aborda el tópico de la pretensión indemnizatoria en casos comerciales relacionados con la garantía de buen funcionamiento; allí, si bien la Corte no explica con la contundencia deseada la interpretación adecuada del inciso segundo del artículo 932 del Código de Comercio, si da a entender en las consideraciones de dicha providencia, que para la prosperidad de pretensiones indemnizatorias bajo el amparo de la citada norma, es necesario el cumplimiento de los mismos requisitos exigibles para la que salva avante un petitum de indemnización por responsabilidad civil contractual.

De modo pues, que resulta indispensable que esta sala aborde uno a uno los requisitos referidos con el fin de determinar si en este caso procede la pretensión indemnizatoria.

En cuanto a la existencia de un contrato válidamente celebrado, no existe en el caso bajo examen discusión alguna sobre la existencia del contrato de compraventa, en tanto fue afirmada desde la demanda y aceptada en la contestación por la parte demandada; además existe prueba documental sobre el mismo, esto es, la factura de venta JE36-209 de febrero 6 de 2019 (folio 31 archivo PDF 3. Anexos y Pruebas).

En lo que refiere al incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del deudor, se advierte que el mismo está dado no por la simple presencia de fallas en el bien comprado, como parece entender la parte demandante;

sino, por la no reparación de las mismas que hayan sido oportunamente reclamadas. Es que la garantía de buen funcionamiento no implica que un bien no pueda presentar fallas, sino que puestas de presente al vendedor en forma oportuna, éste las repare y el bien pueda seguir sirviendo para la finalidad a la cual estaba destinado.

En este caso, se tiene que el demandante anuncia varias fallas, pero desde la misma demanda reconoce que aquellas que se presentaron dentro del tiempo de garantía fueron reparadas por la demandada, es así, como afirma: en el hecho 13 que el 11 de marzo de 2019 presentó rotura de la palanca trasera, estando suspendido el trabajo por 3 días, *“habiendo sido reparada por el vendedor”*; en el hecho 14 que el 27 de marzo de 2019 presentó ruptura de la bomba de transferencia, y permaneció varada por 3 días *“habiendo sido reparada por el vendedor, quien reemplazó la pieza dañada;* en el hecho 15, que el 27 de julio de 2019 presentó falla en el control delantero, permaneciendo varada durante 7 días, *“habiendo sido reparada por el vendedor”*, quien reemplazó la pieza dañada; en el hecho 16, que el 20 de agosto de 2019 presentó falla nuevamente en el control delantero y permaneció varada por 23 días, la que también fue *“reparada por el vendedor”*, quien reemplazó la pieza dañada; en el hecho 17, que el 9 de diciembre de 2019 presenta fallas en la bomba de inyección y en el turbo, permaneció detenida 21 días y fue *“reparada por el vendedor”*, quien reemplazó la pieza dañada; en el hecho 18, que el 17 de enero de 2020 se reventó el balde del equipo trasero, suspendiendo actividades por 14 días, fue *“reparada por el vendedor”* habiendo soldado la pieza dañada; en el hecho 19 que el 6 de febrero de 2020 presentó fallas en el gato de arrastre, y se suspendió actividades por 12 días, *“siendo reparada la pieza dañada por el vendedor”* y, en el hecho 20, que el 14 de abril de 2020 falló el sistema eléctrico, y estuvo detenida por 14 días, *“dicho daño fue asumido por el vendedor”*.

Y en el interrogatorio de parte, ante la pregunta *“¿Es cierto que Gecolsa atendió todas las solicitudes de garantía?”*, expresó el demandante: *“Sí, si señor, claro, sí, hasta el momento todos los problemas que tuvimos los atendió Gecolsa”* (minuto 00:8:30 a minuto 00:9:00 archivo 13 de la audiencia inicial)

Lo anterior implica, un reconocimiento de la atención por parte de la demandada a los reclamos realizados durante el tiempo de la garantía, lo que lleva a concluir que dicha garantía no fue incumplida, y por el contrario atendida debidamente.

Véase además, que el material probatorio allegado por la parte demandante, a quien le corresponde la carga de la prueba de sus pretensiones, no da cuenta clara de los hechos relacionados con las fallas, como anexo a la demanda aportó los documentos contenidos en el archivo carpeta 01 ExpedienteRecibido archivo 3, que evidencian ordenes de trabajo del 17 de febrero de 2020 y 30 de enero de 2020, 29 de diciembre de 2019, 12 de diciembre de 2019, sin que se pueda establecer de dónde sale dicho documento pues no tiene logo que lo identifique, ni sello, solo nombre del cliente- MODESTO- y el técnico, sin identificar si es empleado de GECOLSA, además de no coincidir con las fechas señaladas en las que se presentaron las fallas relacionadas (pag PDF 58 a 61).

También se anexan cuatro certificaciones expedidas el 04 de septiembre de 2020 por AGRICOLA HASS S.A.S. ZOMAC, EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO ESP, AGRICOLA OCOA COLOMBIA S.A., AGROPECUARIAS ORO VERDE S.A.S ZOMAC, TROPIC-ORGANIC COLOMBIA S.A.S en las que indican que el señor MODESTO MARTÍNEZ ASPRILLA ha trabajado prestando el servicio, removiendo tierra manejando una retroexcavadora 416F2, pagando por hora \$90.000.00, pero ninguna de ellas especifica el tiempo en que se prestó ese servicio, por cuántos días u horas, ni quien era el propietario de la máquina con la cual MODESTO prestaba el servicio (pág PDF. 64 a 68).

Se adjuntan también declaraciones extrajuicio de JORGE URIEL ESCOBAR HERRERA (demandante), ARISTIDES ESCOBAR HERRERA y MARLENI ESCOBAR HERRERA, dando cuenta que MODESTO abrió carretera con la retroexcavadora 416F2 en las fincas La Isabella, La Juliana, La Marruecos, ocupando 370, 250 y 300 horas, por valor de \$90.000.00 cada hora, pero al igual que en los demás documentos adjuntos, no se especifica el tiempo en el que se hicieron tales trabajos ni quién era el propietario de la máquina con la cual MODESTO prestó ese servicio (pag.pdf 69 a75).

De esta prueba documental allegada con la demanda y con la respuesta a las excepciones, la cual puede ser apreciada conforme el art. 262 del C.G.P., pues a pesar que la parte demandada pidió ratificación al momento de contestar, el juzgado no lo decretó y la parte demandada guardó silencio, no se puede establecer el tiempo que la máquina permaneció detenida a consecuencia de las fallas anunciadas en el líbello genitor, ni que para esos tiempos la máquina tuviera trabajo contratado que hubiere dejado de cumplir, solo que una máquina retroexcavadora 416F2 operada por el señor MODESTO les prestó el servicio de movimiento de tierra y pagaron \$90.000.00 hora, sin poder determinar en qué tiempo se prestó ese servicio, ni cuantas horas. Desprendiendo de estas expresiones que la máquina si prestaba el servicio para el cual se compró, siendo útil para su finalidad, reafirmando así la ausencia de vicio que la hiciera impropia.

La parte actora también trajo varios testigos recibidos en audiencia celebrada el 10 de junio de 2021 (carpeta 01 ExpedienteRecibido archivo 14), señores JORGE IVAN RESTREPO, ELKIN DARIO CASTILLO RODRIGUEZ (22'30"), JORGE ALBERTO RESTREPO AGUDELO (38'), DANIELA COSSIO ESCOBAR (51'50"), EDGAR DE JESÚS SEPULVEDA FLÓREZ (1h 6'), MODESTO MARTÍNEZ ASPRILLA (1h18'35"), y 16 de julio (archivo 19) EDWIN DURANGO (9'55"), OLGA MARIA GARRO COSSIO (22'45"), ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ (39'40"), JUAN CARLOS OCHOA RODRÍGUEZ (53'58"), DIEGO ANDRÉS NAVARRO BENITEZ (1h6'10"), pero de sus dichos no se puede establecer tampoco, con claridad, los tiempos en los cuales la máquina presentó fallas.

Esas deficiencias de las pruebas aportadas al plenario, conllevan a que no exista certeza del incumplimiento aducido, por el contrario, lo acreditado es la atención de las reclamaciones realizadas durante el tiempo de la garantía.

Es que incluso, si en gracia de discusión, se pudiera sostener que la simple presencia de varias fallas, conllevan al incumplimiento de la obligación de garantía de buen funcionamiento –como lo ha pretendido sostener la parte demandante-, imposible resultaría reconocer los perjuicios aducidos, debido a las deficiencias de las pruebas encaminadas a demostrar la existencia y cuantía de los mismos, pues como se reseñó, el material probatorio en el cual la parte demandante apoyó sus pretensiones, carece de certeza en cuanto a tiempos de las fallas, tiempos de los contratos que aduce la parte demandante no pudo ejecutar cabalmente por las aducidas fallas y valor de los contratos, pues incluso se pretende tener como valor de la hora

contratada y base del lucro cesante pedido, la suma bruta de \$90.000 sin tener en cuenta las deducciones por conceptos básicos como gasolina, mantenimiento y operación de la máquina, entre otros.

Los anteriores argumentos, sin necesidad de entrar en el análisis de los demás requisitos necesarios para la prosperidad de la pretensión indemnizatoria, conllevan a la necesidad de denegar también las pretensiones subsidiarias segundo grupo.

COROLARIO

Así entonces como no se cumplen los requisitos para la prosperidad de las pretensiones subsidiarias segundo grupo, imperioso resulta NEGAR también dichas pretensiones de la demanda.

Como consecuencia de la negativa de las pretensiones subsidiarias segundo grupo, derivado ello del cumplimiento de la orden tutelar a la que se ha venido haciendo referencia en esta sentencia, imperioso resulta modificar el tópico de la condena en costas, por lo cual y, pese a las resultas del recurso, no hay lugar a imponer condena en costas de ambas instancias a la parte demandante por estar cobijada con amparo de pobreza.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

En cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en sentencia de tutela STC075-2022 del 19 de enero de 2022, Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-04648-00 la parte resolutive de esta sentencia quedará así:

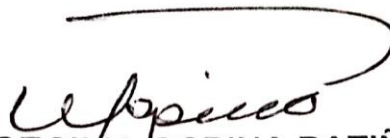
“PRIMERO. REVOCAR la sentencia objeto de recurso y su adición, proferida en audiencia celebrada el 13 de agosto de 2021 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO-ANT, se **DENIEGAN** las pretensiones **PRINCIPAL y SUBSIDIARIAS-PRIMER GRUPO**” (Decisión contenida en la sentencia del 24 de noviembre de 2021 y que no fue dejada sin efecto en la orden tutelar que aquí se cumple).

SEGUNDO: DENEGAR las PRETENSIONES SUBSIDIARIAS SEGUNDO GRUPO, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. SIN CONDENA EN COSTAS a la parte demandante por el amparo de pobreza.

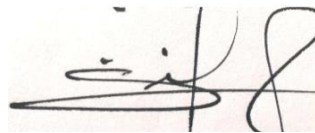
CUARTO. ORDENAR que por secretaría se devuelva el expediente al juzgado de origen, en firme esta decisión.

Los Magistrados,



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



GLORIA PATRICIA MONTOYA ARBELÁEZ

Con aclaración de voto